



TRIBUNAL SUPERIOR DE MEDELLÍN
SALA UNITARIA DE DECISIÓN CIVIL

Medellín, seis de julio de dos mil veintidós

Procedimiento:	Impugnación actas de asamblea
Radicado:	5001 31 03 006 2022 00189 01
Demandante:	Jairo Naranjo Flórez y otro
Demandado:	Universidad de Medellín
Decisión:	Confirma

Magistrado Ponente: Martín Agudelo Ramírez

ASUNTO

Resolver la apelación del demandante en contra del auto del 19 de mayo de 2022 proferido por el Juzgado Sexto Civil del Circuito de Medellín.

ANTECEDENTES

1. Jairo Naranjo Flórez y Carlos Eduardo Naranjo Flórez, en demanda radicada el 16 de mayo de 2022, pretenden que se declare la validez parcial de la Asamblea General de la Universidad de Medellín celebrada el 17 de diciembre de 2021.
2. El *a quo* rechazó la demanda porque operó la caducidad. Consideró que de conformidad con el art. 382 del CGP, la demanda de impugnación de actas de asamblea solo puede proponerse dentro de los dos meses siguientes a la fecha del acto respectivo. En este caso se propuso la demanda pasados los dos meses.
3. La parte actora impugnó. Señaló que son terceros frente a la asamblea, al punto que tienen la aspiración de ser nombrados en ella, por lo que no tuvieron conocimiento de lo que sucedió. Que varios delegatarios solicitaron copia del acta de la asamblea debidamente protocolizada, pero la respuesta de la universidad fue negativa, lo que implica que no había acto por entregar. Que finalmente les entregaron copia del acta en abril y fueron notificados que fue protocolizada con las firmas de los delegados correspondientes el 14 de marzo de 2022, por lo que

resultaba imposible demandar antes de conocer el documento contentivo de la decisión a impugnar.

Que el art. 382 ibidem, permite entender que los dos meses comienzan a correr una vez termina el acto que se impugna, luego, como la asamblea terminó en el momento de la protocolización que sucedió en abril con la firma de los delegados, será desde esta fecha que deben contarse los términos.

CONSIDERACIONES

El artículo 382 del CGP preceptúa que sólo es posible impugnar los actos o decisiones de asambleas dos meses siguientes a la fecha del acto respectivo. Frente a esta norma sostiene el *a quo* que el término debe comenzar a contarse desde que tomó la decisión que se impugna; esto es, desde el 17 de diciembre de 2021 que la Universidad de Medellín celebró su asamblea general.

Por su parte, el actor argumenta que el acto -asamblea general de la Universidad de Medellín concluyó en abril cuando todos los delegados firmaron el acta de la reunión protocolizando el acta que hoy se demanda.

Así pues, el problema jurídico a resolver en el presente auto consiste en Confrontar las dos tesis anteriores, para determinar si el término es objetivo y se cuenta a partir del día de la reunión en que se tomó la decisión o si se cuenta a partir de que la parte impugnante conoció la decisión.

Sobre la discusión del *dies a quo* para la caducidad de los dos meses de este tipo de demandas, la Corte Suprema de Justicia –Sala Civil-, en sentencia STC 1811 de 15 de febrero de 2017, se ocupó de un caso en el que se discutía si el término se contaba desde la publicación del acta de la asamblea en la que se tomó la decisión impugnada o si desde la publicación del acta después de la verificación por parte de un comité nombrado en la asamblea. Puntualmente dijo la Corte:

La redacción de la mencionada regla aleja la arbitrariedad atribuida al funcionario tutelado, por cuanto, sin duda de ella emerge, como acertadamente lo concluyó el juzgador *ad quem*, que el lapso para ejercitar la acción ordinaria en comento, **inicia a contar desde la data en la cual se celebró la reunión donde se adoptó la decisión controvertida**, sin importar, según la nueva legislación, el día de su publicación (...). Negrilla intencional.

La razón de la decisión de la sentencia citada es perfectamente aplicable a este caso: la norma permite razonadamente interpretar que el término de los dos meses se cuenta desde la celebración de la reunión en la que se celebró el acto impugnado. Si bien el presente caso no trata de uno en el que se impugne actas de asambleas de copropiedades, lo que subyace a ambas discusiones es si el término de la caducidad se debe contar desde la publicación del acta que contiene el acto impugnado o si desde la fecha en la que se celebró la asamblea en la que se tomó la decisión.

Así pues, se desprende de la interpretación realizada por la Corte Suprema de Justicia, en primer lugar, que se impugna el acto o la decisión, mas no el acta, y en segundo lugar, que el cómputo de dicho término no mira a la publicidad del acto, sino que se cuenta desde la fecha de la reunión en la que se tomó la decisión.

De esta manera no importan las formalidades (o protocolización) que deba seguir el acta, salvo que, según la misma norma, el acto a impugnar deba registrarse. Sólo en estos últimos eventos cobra importancia la publicación de la decisión a través del registro pertinente.

De conformidad con lo anterior, se confirmará la decisión impugnada.

DECISIÓN

En mérito de lo expuesto, el Tribunal Superior de Medellín. en Sala Unitaria de Decisión Civil, **RESUELVE: Confirmar** el auto de fecha y origen indicado. Devuélvase el expediente.

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE


Martín Agudelo Ramírez
Magistrado